

CATALUÑA

Es lo de siempre. En las situaciones de crisis, lo más fácil, tanto para los poderes como para las mayorías sociales, es dirigir el foco acusador a los sectores más frágiles de la sociedad, que han de ver cómo a los abusos que sufren se le añade el de aparecer como responsables del mismo desorden social del que son al tiempo víctimas y producto. En una ciudad como Barcelona, maltratada por la masificación turística, por el encarecimiento de todo, por el ruido y la contaminación, por la inaccesibilidad de la vivienda..., parece ser que uno de nuestros grandes problemas es el de los vendedores ambulantes y su escandalosa manera de ganarse la vida. Evocando el primer largometraje de François Truffaut —*Tirez sur le pianiste!*—, bien podríamos decir que la consigna urgente en estos momentos es “¡Tirad sobre el mantero!”. El mantero es, en efecto, el blanco perfecto.

Pero, ¿de quién es el “problema de los manteros”? De los barceloneses no, al menos por lo que indica el último barómetro del Ayuntamiento de Barcelona, aparecido el pasado junio, en que el asunto ni se menciona entre las inquietudes de los encuestados. El incidente de hace unos días en la plaza de Catalunya entre unos vendedores y un turista americano, del que solo ha circulado una versión, ha llevado a presentar la venta ilegal como un peligro para la industria turística. Pero lo cierto es que tampoco en las encuestas de satisfacción de los visitantes asoma la cuestión. En la publicada por el propio Ayuntamiento el pasado diciembre, los turistas se quejan de los precios y, sobre todo, la presencia que les incomoda por encima de cualquier otra no es la de los manteros, sino la

de los turistas. Lo mismo para las opiniones vertidas en Tripadvisor. Ninguna queja sobre los vendedores ambulantes y sí multitud sobre los carteristas, el ruido, la suciedad, incluso el nacionalismo..., pero, por encima de todo, la saturación que ellos mismos provocan. Conclusión: el principal enemigo de la industria turística es la propia industria turística y su codicia.

En lo que hay que darles la razón a los preocupados por el asunto mantero es en que su presencia es inaceptable en el espacio público. Un vendedor senegalés



Un mantero vende sus productos en el muelle de la Barceloneta. / JUAN BARBOSA

¡Tirad sobre el mantero!

MANUEL DELGADO / HORACIO ESPINOSA

Según el barómetro municipal, el principal enemigo de la industria turística es la propia industria turística y su codicia

sin licencia no puede estar ahí, a la vista de todo el mundo, haciendo evidente que existe la miseria. El espacio público no es para él, puesto que el espacio público debe permanecer ordenado, previsible, desconflictivado, sin sobresaltos, sin fealdad. De su buen estado de revista depende ese otro mercadillo en que se compran y venden ciudades. Y no digamos si el espacio público es proclamado “de calidad”. El mantero no es “de calidad”, de ahí la urgencia de su exclusión. El lugar del mantero no es el quimérico “espacio público”; su lugar es la calle, ese esce-

nario donde acaba emergiendo todo lo que conforma la sociedad, lo bueno y lo malo, lo maravilloso y lo arbitrario; también la pobreza. El mantero encarna la verdad de la calle frente a la mentira de un espacio público que, por cierto, no existe, puesto que todo él está ya privatizado.

Vamos a dejar de lado lo que de sarcástico tiene que nos duela tanto que se ahoguen inmigrantes en el mar y que, si no se ahogan y consiguen llegar a tierra, nos dediquemos a perseguirlos luego de haberlos criminalizado. Está claro que, de una forma u otra, se está de acuerdo en que sobrevivir no es lo suyo.

¿Alternativas? Vamos a descartar la solución policial, que ya le costó la vida a un vendedor en Salou en 2015. De entrada, como propuso en el Congreso Unidos Podemos a raíz de los incidentes en Lavapiés este mes de marzo, despenalizar el top-manta. Luego, garantizar a estas personas el derecho a vivir legalmente, porque, ¿cómo puede ser la vida ilegal? El paso siguiente sería reconocer que son lo que son y quieren ser: trabajadores, y que, como tales, tienen la necesidad de trabajar y hacerlo de manera justa y, por supuesto, protegida. Y, puesto que es una necesidad, debería automáticamente constituirse en derecho garantizado por los Gobiernos. En definitiva, se trata de asumir y llevar a sus últimas consecuencias esas dos premisas incontestables, a las que toda medida destinada a los llamados manteros debería ceñirse: que son personas y que son trabajadores. Como nosotros.

Manuel Delgado y Horacio Espinosa son miembros del Observatori d'Antropologia del conflicte Urbà

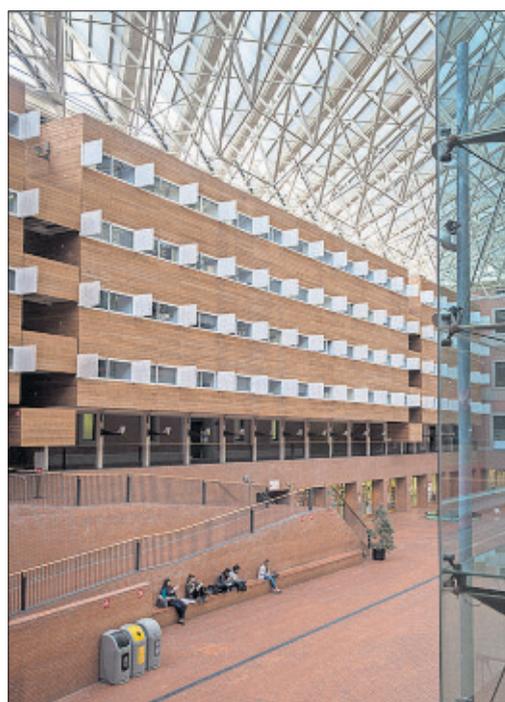
Unos nuevos e inéditos estudios universitarios

JORDI CAMÍ

Imaginad unos dirigentes con gran experiencia, al frente de empresas con un gran volumen de negocio, en parte gracias a su actividad fuera de España. Unas empresas con crecimiento sostenido y con la necesidad de dar empleo a un número importante de ingenieros. Imaginad que estos dirigentes empresariales detectan la necesidad de incorporar ingenieros con una formación sólida en materias básicas -la especialización no preocupa dado que se trata de algo de la etapa de los másteres y que, mejor que nadie, también la pueden ofrecer las propias empresas-, unos ingenieros que tienen que ser muy conscientes de la vertiente económica y que no pueden tener ningún tipo de obstáculo en cuanto al dominio del inglés. Imaginad que estos dirigentes empresariales están dispuestos a apoyar a las universidades públicas para conseguir que este tipo de profesionales que el mercado necesita pueda generarse a nuestro medio.

Imaginad que están dispuestos a apoyar a las universidades públicas por la sencilla y nada trivial razón de disponer de profesionales con títulos oficiales, directamente homologables con los títulos que expiden las mejores universidades europeas. Pues nada de todo esto hay que imaginarlo, puesto que hoy es una realidad.

Acaba de ocurrir gracias a una colaboración inédita entre la iniciativa privada y dos universidades públicas, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra. Efectivamente, el próximo curso académico empezará en Barcelona un nuevo grado denominado oficialmente “Tecnologías Industriales y Análisis Económico” (Industrial Engineering and Economic Analysis), un primer curso con 40 alumnos, unos estudiantes que iniciarán el grado con una nota de corte de 12,1, una nota entre las veinte primeras más altas de este año y que ostentan los dobles grados de Física y Matemáticas y la mayoría de



Edificio de la UPF. / CARLES RIBAS

carreras de Medicina con una altísima demanda. Una nota de corte, buena noticia, que expresa el interés que ha despertado de entrada la propuesta entre los jóvenes que empezarán estudios universitarios en Cataluña.

Son muchos los elementos que conviene destacar de esta iniciativa público-privada. Señalaría tres. Primeramente, que es un modelo que preserva la igualdad de oportunidades, no solo son los

títulos, sino que también con la matrícula, que sale a precio público. Así pues, los estudiantes seleccionados serán los mejores de entre los que lo han deseado, independientemente de su procedencia social. En segundo lugar, algo inédito para las universidades -en estos tiempos de lamentables limitaciones-, en el sentido de que el riesgo financiero será inexistente dado que recibirán un apoyo económico sostenido del sector privado, dispuesto a financiar los costes totales del grado. Y en tercer lugar, el hecho de que la enseñanza será íntegramente en inglés, como sucede en otros -muy pocos- grados que también se imparten en Cataluña.

No ha sido sencillo llegar a este hito, que apenas es un inicio. El proyecto ha tenido que pasar por un proceso laborioso de comprensión por parte de la comunidad universitaria, pero exitoso, gracias al liderazgo de los rectores Enric Fossas, Jaume Casals y

Francesc Torres. La Generalitat ha apoyado siempre el proyecto para que acabara con un formato oficial y, tan o más importante, el sector privado, que es el que hace la demanda, ha ido aclarando sus recelos mientras se ha dispuesto a financiarlo.

La cooperación público-privada se hace desde la fundación BEST (Barcelona Education for Science and Technologies), entidad privada que preside el ingeniero Joaquim Coello, entidad que representa los intereses de las empresas y que canaliza la financiación a las universidades. BEST lo han creado las asociaciones Barcelona Global y Femcat y participa la UPC y la UPF y ahora se están incorporando las empresas comprometidas.

Quedan flecos pendientes, hay que formalizar una relación estable con una tercera universidad europea, hay que levantar más recursos para poder dar becas a los estudiantes (nadie puede quedar fuera por la carencia de recursos), pero si se ha llegado hasta aquí, el resto se prevé más sencillo. El gran atractivo es que se está ensayando una cooperación público-privada inédita que se podrá hacer extensible a otras demandas razonadas del mercado.

Jordi Camí es catedrático en la Universitat Pompeu Fabra y vocal de la Fundación BEST.